

COMENTARIOS AL ACONTECER EN EL MUNDO

LA CONFERENCIA DE LUXEMBURGO DE LOS MINISTROS DE ASUNTOS EXTERIORES DE LA CEE

Si hay un aspecto de la política internacional en el que el general De Gaulle estuvo acertadísimo, fue en su tenaz oposición al ingreso de Gran Bretaña en la Comunidad Europea. La reunión de abril de los ministros de Asuntos Exteriores de esa organización, celebrada los días 1 y 2, tal evidencia, a la vista de la actitud adoptada por el flamante titular del Foreign Office, James Callaghan. Cualquiera podía pensar que quien hacía oír su voz era el representante de un Gobierno en el poder después de un rotundo triunfo electoral y no el de un partido laborista que ha de caminar por el filo de una navaja; tan exigua es la mayoría con que cuenta en la Cámara. Sin embargo, a despecho de lo incongruente de la actitud airada y hasta amenazante de James Callaghan, es de reconocer que el partido laborista tiene el mérito de ser fiel a sí mismo en lo que respecta a posturas frente a la CEE. Aunque los acontecimientos se atropellan de forma tan precipitada en la actualidad que apenas si cabe la posibilidad de echarle un vistazo a lo que sucedió ayer, es de señalar que la andanada de Mr. Callaghan en Luxemburgo es eco de las declaraciones hechas en noviembre de 1966 por el entonces también primer ministro de Gran Bretaña, Harold Wilson. Sin ambages, declaró que el acercamiento a la CEE que pretendía su país—que ya había sufrido el célebre portazo francés del 14 de enero de 1963—no implicaba para Gran Bretaña obligaciones políticas o militares ajenas al ámbito puramente económico del Tratado de Roma. Era remachar el clavo del ministro británico de Asuntos Exteriores, Mr. Brown, que poco antes había declarado la carta que su país jugaría en orden a una programada política internacional comunitaria: Gran Bretaña no tenía intención alguna de modificar la suya ni de renunciar a sus relaciones especiales con los Estados Unidos. Si a estas manifestaciones se agrega que Gran Bretaña se negó a firmar el Tratado de Roma en 1958, que creó la EFTA con ánimo de torpedear la CEE, y que, fracasado su plan—la economía de

los países comunitarios iba viento en popa, mientras la suya languidecía—, se decidió a reconsiderar su anterior negativa, confiando en el artículo 118 del Tratado de Roma, para remediar sus dolencias económicas, lo sucedido en Luxemburgo es exponente de la coherencia y perseverancia del partido laborista, cuando menos en función de la CEE.

Como no podía por menos de suceder, las pretensiones de Mr. Callaghan de renegociación del Tratado suscrito por el Gobierno Heath toparon con un «no» unánime de sus ocho colegas. Asimismo, un silencio desaprobador acogió su arremetida contra la unión económica y financiera, que no necesita vapuleos para tambalearse. Con todo, la negativa de los Ocho se suavizó con una petición de precisiones a facilitar por Londres en cuanto a puntos concretos de sus pretensiones, que inciden en la política agrícola, la aportación británica en el presupuesto comunitario, el control del Parlamento británico sobre la política económica de la Comunidad y la adaptación al Reino Unido de la TVA (tasa sobre el valor añadido). Es decir, que se volverá sobre el tema en la reunión de mayo, a celebrar en Bonn, con la esperanza de buenas componendas que, sin ser una renegociación, den satisfacción a los dirigentes laboristas.

También se han aplazado hasta mayo, cuando menos, decisiones relativas a otros dos grandes temas de la reunión de Luxemburgo: la Conferencia euro-árabe sobre el petróleo, que trae a mal traer a Washington, y las relaciones Estados Unidos-Europa. Ambos son escollos con que tropieza esa tan proclamada y vanamente perseguida unidad política europea, que, de hecho, apenas si registra algún otro ejemplo que la unanimidad de postura con motivo de la negociación del Kennedy Round en 1962. Frente a la crisis energética, la unidad europea ha brillado por su ausencia. Es fallo que podría remediar la Conferencia euro-árabe, propugnada por Francia. Pero en Luxemburgo Gran Bretaña puso el veto al anuncio de su celebración y supeditó su retirada a consultas con los Estados Unidos, lo que implica una posible oposición a que se celebre. Bonn, cuyas relaciones con los Estados Unidos, sin ser «especiales», merecen especial consideración, se alineó con Londres. Huelga decir que Francia se opuso irritadamente a esa supeditación de hecho de la CEE a los Estados Unidos, sin encontrar apoyo decidido de parte de los demás miembros de la Comunidad, parapetados en una especie de neutralismo. Y como en un callejón sin salida sólo cabe retroceder o detenerse, los Nueve se detuvieron, en espera de la reunión de mayo, por si surge entonces una fórmula de avenencia. De momento no se vislumbra,

dado lo contrapuesto de las posturas y la exigencia de unanimidad para las decisiones de la CEE, causa fundamental de sus frecuentes parálisis.

No más afortunada fue la discusión del gran tema de las relaciones Estados Unidos-CEE, que no se ciñen al campo económico y comercial, que es en la actualidad el marco comunitario propiamente dicho, en el que han acabado por meterse de rondón lo político y lo militar. Entre el ministro británico de Asuntos Exteriores, haciendo de caballo de Troya del atlantismo a ultranza, como predijo el general De Gaulle, o sea, entusiasta partidario de consultas con los Estados Unidos, nada de limitadas a lo económico y comercial de la CEE—¡que ya sería consultar!—y la categórica oposición francesa a ese tipo de vinculación con que los países democráticos del mundo occidental no cesan de motejar a los países del Este con relación a la URSS, se sitúa la propuesta del presidente del Consejo de Ministros en esa reunión, Walter Scheel. Propuso una solución equidistante: consultas con los Estados Unidos sobre los temas de política exterior de los Nueve que interesan o afectan a aquéllos. En principio, esta razonable solución debería ser unánimemente aprobada. Pero en la práctica la dificultad estriba en definir y concordar sobre los temas a consultar y, en justa reciprocidad, conseguir que los Estados Unidos consulten a su vez a los países europeos sobre los temas de política internacional que les interesen o afecten. No está tan lejos el escalofrío de la alerta atómica del pasado 24 de octubre, si bien queda lejos la crisis de Cuba de 1962, como para no haber escarmentado.

Por consiguiente, sólo un optimismo decididamente reñido con la realidad permitiría abrigar una verdadera esperanza—y no ya un buen deseo—de que en la reunión de Bonn surgiera la fórmula que llevara a armonizar la salvaguarda de la independencia de los europeos y el mantenimiento y hasta el fortalecimiento de la alianza con los Estados Unidos, que es de necesidad y conveniencia tanto para los países europeos como para los propios Estados Unidos.

EL PROBLEMA KURDO DE IRAQ

Mientras la opinión mundial está pendiente del escenario del Próximo Oriente, donde se representa un acto más del drama árabe-israelí, se está desarrollando entre bastidores otra representación con menguadísima asistencia de público y limitada atención de los medios informativos. Nos referimos a la reanudación de hostilidades entre el Gobierno de Iraq y la nutrida

minoría kurda. No es conflicto reciente. El estado latente o declarado de oposición de los kurdos al Gobierno de Bagdad se remonta a la creación misma de Iraq a raíz de la I Guerra Mundial; un Iraq que nació a la vida internacional con la hipoteca de diversas minorías raciales y religiosas incluidas en sus fronteras. La más coherente y numerosa es la de los kurdos, que suma tres millones y está afincada en el Norte del país, en las montañas del Kurdistán, región ésta que, sin solución de continuidad, quedó repartida entre Siria, Iraq, Turquía e Irán. Es decir que cada uno de estos países comprende una minoría kurda que, sumadas, totalizan un pueblo de 16 millones de personas, en situación semejante a la de los polacos a finales del siglo XVIII.

Aunque el mosaico racial y religioso de Iraq haya sido causa de no pocas dificultades para el Gobierno de Bagdad, las únicas reales tempestades que haya tenido que arrostrar han sido los sucesivos levantamientos de los kurdos, atrincherados en sus montañas. Siempre derrotados, nunca se han dado por vencidos. Al mando del mul-lah Mustafá Barzani, más tarde jefe del llamado Partido Democrático kurdo, en 1960 iniciaron una nueva rebelión, contra la que tuvieron que luchar, sin éxito definitivo, los sucesivos hombres fuertes de Iraq, el general Kassem y el general Aref. Al acceder al poder el partido Baas en 1968, el actual presidente de la República iraquí, Ahmed Hasan El Bakr, tomó el relevo en la lucha contra los levantiscos kurdos, que, lejos de batirse a la retirada, en marzo de 1969 iniciaron ataques contra los pozos petrolíferos de la región de Mosul, cuya producción representa el 85 por 100 de los recursos del presupuesto iraquí.

Entonces el Gobierno de Bagdad empezó a estimar la conveniencia de buscar una fórmula política para solucionar el problema. Se emprendieron sigilosas negociaciones, que duraron meses, para poner término a una guerra que duraba desde hacía diez años, entre los montañeses kurdos y los árabes de las llanuras, circunstancia ésta de importancia en el desarrollo del conflicto armado. Finalmente, el 11 de marzo de 1970, el presidente El Bakr anunció por televisión el acuerdo de autonomía concedida a los kurdos, lo que fue motivo de grandes fiestas, celebradas sobre todo por los iraquíes de raza árabe. Tal acuerdo de autonomía, cuya aplicación se aplazó hasta el 11 de marzo de 1974, reconoce la existencia en Iraq de dos nacionalidades o etnias: la iraquí y la kurda. Aparte de diversos privilegios concedidos a los kurdos en materia de prensa, libros, televisión y enseñanza, el acuerdo preveía el nombramiento de un vicepresidente kurdo y una ampliación de

las responsabilidades de los kurdos en la administración y el ejército. Con todo, y a pesar de la publicación oficial del texto del acuerdo, los kurdos decidieron demorar la entrega del material pesado de que disponían hasta la aplicación total del acuerdo suscrito, es decir, hasta el 11 de marzo de 1974. Tan recelosa prudencia no ha sido un desacierto, clama Barzani, por cuanto, dice, el estatuto de autonomía, publicado el pasado 11 de marzo, dista de los términos del acuerdo de 1970, lo que no ha impedido que a los pocos días de proclamada la autonomía kurda, Bagdad haya empezado a poner en práctica sus primeros artículos ni que miembros del Partido Democrático kurdo mantuvieran contacto con el Gobierno central.

El que disiente airadamente de las alteraciones que, en su criterio, ha sufrido el acuerdo de 1970 al convertirse en Estatuto es Mustafá Barzani, que, por cierto, a mediados de marzo fue víctima de un nuevo atentado, del que salió ileso y más decidido que nunca a no ceder a las presiones de Bagdad, postura que comparten sus fieles seguidores. De la combatividad kurda es exponente el comunicado distribuido en Beirut por el Partido Democrático, pidiendo el fin de la «tiranía» iraquí y la instauración de un sistema parlamentario y democrático, o sea, el derrocamiento del partido Baas, que ha sido el único en tomar en consideración las reivindicaciones kurdas, en lugar de contestarlas a tiros. Además de esas pretensiones, Barzani reclama que la autonomía de la región kurda se amplíe hasta la rica región petrolífera de Kirkuk, al norte de Mosul, el mayor centro petrolero de Iraq, sexto país productor del mundo. Bagdad no se había negado a ceder a los kurdos parte de los ingresos procedentes de Kirkuk mediante un «reparto equitativo». Barzani no lo admite y reclama la totalidad de los ingresos para el presupuesto autónomo de su región. Es decir, que a las viejas tensiones raciales hay que añadir la tensión por motivos petroleros, que son de las más enconadas y siempre hacen recelar la existencia de tercero—que no es forzosamente una nación—interesado en hacerse con el petróleo al socaire del nacionalismo de los protagonistas de la disputa.

No todos los kurdos comparten la tesis maximalista de Barzani y sus seguidores, que no son pocos. Pero los residentes en ciudades y regiones donde predominan árabes tienden a repudiar o desentenderse del liderazgo de Barzani, que ya no se ciñe a la defensa de la minoría kurda y la obtención de su autonomía, sino que ataca la unidad de Iraq y da al traste con la posibilidad de una paz duradera y constructiva. La reaparición en Bagdad el 27 de marzo del diario kurdo *Al Taaji (Fraternidad)* ha sido un tanto

a favor del entendimiento árabe-kurdo, a despecho de la detención de adictos a Barzani e incluso de la destitución el 6 de abril de cinco ministros kurdos del Partido Democrático que habían entrado a formar parte del Gobierno.

Son incidentes que no pueden por menos que producirse al iniciarse el difícil camino de la autonomía kurda, que sigue adelante, como lo muestra el nombramiento el 22 de abril del diplomático de esa etnia, Taha Moheddin Maruf, embajador en Roma, para el cargo de vicepresidente de Iraq, aparte del nombramiento de cinco ministros kurdos en sustitución de los anteriormente destituidos. Ello evidencia que Bagdad no renuncia a que triunfe la solución política por la que aboga el Gobierno y, en primer término, el presidente El Bakr. A esta voluntad de paz, Barzani responde con una escalada de la lucha armada iniciada en marzo: Que los combates se recrudezcan, según dan a conocer de vez en cuando los medios informativos; que los kurdos, parapetados en sus montañas, resistan al ejército iraquí; que la aviación gubernamental siembre la desolación y haya aviones iraquíes derribados y carros inutilizados y luchas enconadas en pueblos y ciudades del Norte del país no significa que la parte iraquí del dividido Kurdistán pueda alcanzar su independencia, cuando menos, a corto plazo, aunque el ejército gubernamental no lograra vencer a los kurdos en armas. Sólo aparentemente está localizado ese conflicto. De hecho incide sobre Siria, Turquía e Irán, con sus respectivas minorías kurdas. La eventualidad de que el conflicto iraquí se extendiera a Irán ha movido a Teherán a reanudar sus relaciones diplomáticas con Bagdad, pese al viejo pleito entre los dos países. Por tanto, los vecinos de Iraq se guardarán de aportar ayuda a Barzani y sus huestes. Tampoco pueden razonablemente esperarla éstos de Israel, que hartó tiene con sus problemas internos y las secuelas de la guerra del Kippur. Además, geográficamente, cae a trasmano. En cuanto a Estados Unidos, atareados en apagar las persistentes llamas del conflicto árabe-israelí del pasado octubre, no tiene interés en provocar nuevos incendios en esas áreas explosivas y reactivar la unidad árabe en torno a un Iraq en peligro de desmembramiento y pérdida de las riquezas petrolíferas. Por su parte, la URSS, si en algo interviene, será para suministrar a buen precio material bélico a su aliado iraquí.

Por ello, desde el punto de vista iraquí, el Gobierno de Bagdad está acertado al jugar imperturbablemente la carta política de la autonomía de los kurdos, según el estatuto del 11 de marzo pasado, aun sin dejar de

combatir ferozmente los propósitos de independencia total de Barzani y sus seguidores, dejando al margen la justicia que humanamente está acaso de parte de aquéllos y de las demás minorías de esa raza incluidas en otros países.

LOS ACUERDOS DE COOPERACIÓN HISPANO-LIBIA

La visita oficial a España que el 23 de abril inició el primer ministro de la República árabe de Libia, Abdeselam Ahman Jalud, al frente de una nutrida misión, se impone como un hito de singular importancia en el largo camino de las relaciones entre nuestro país y el mundo árabe. En efecto, reforzando lazos de incuestionable amistad, pero demasiado limitados a la expresión verbal, Libia ha venido a emprender formalmente una nueva andadura, orientada a establecer con España intercambios de todo orden susceptibles de asentar esa mutua amistad sobre bases concretas. Esta visita además tiene una interesante particularidad. Siendo Libia una de las últimas naciones árabes en haber adquirido esa capacidad económica que otorga la capacidad política de opción de los rumbos exteriores, cabe decir que es la primera que se dirige a España para trazar el marco de una auténtica cooperación. Tal se impone como complemento de una amistad que dejaba un poco suelto el cabo de las relaciones económicas y técnicas. Otros países harto menos leales al mundo árabe han sabido asirlo para penetrar, cuando no irrumpir, en un mercado en el que apenas si se ha venido notando la presencia de España, acaso demasiado absorta en abrirse paso hacia Europa.

Como no hay mal que por bien no venga, la crisis energética ha llevado a nuestro país a reaccionar y esforzarse en ampliar su horizonte comercial merced a la inclusión del mercado árabe, aunque sólo fuera para aliviar con nuestras exportaciones el pesado fardo de las importaciones de crudo, que sangran las reservas monetarias. Tal pregonan las sucesivas misiones españolas que han visitado países árabes productores de petróleo. El hecho de que Libia haya enviado a España destacados miembros de su equipo gubernamental pone de manifiesto lo acertado de la orientación económico-comercial del Gobierno español.

Al margen de estas consideraciones, se dan en Libia circunstancias peculiares que invitan a una rápida ojeada. Es obvio recordar que Libia, uno de los países más pobres del mundo, por arte del descubrimiento de fabu-

las riquezas petrolíferas en su subsuelo ha pasado a ser uno de los países más ricos del mundo. Libia se asemeja al jornalero que ha ganado una quiniela de un solo acertante. Su riqueza, exclusivamente reducida a un sólo producto, la ha convertido en un Estado-rentista, o sea un Estado que percibe cuantiosos ingresos sin la mediación del trabajo. Ello sitúa a Libia en la curiosa situación de un país que en modo alguno puede incluirse en el Tercer Mundo, aunque tampoco pueda clasificarse entre los países desarrollados o siquiera en vías de desarrollo, pese a la abundancia de sus recursos financieros. Sin embargo, Libia reúne alguna de las condiciones del desarrollo económico: su nivel de vida no cesa de elevarse (se cuenta un coche por cada 20 habitantes); dispone de fabulosos medios para financiar inversiones sociales, pero apenas si ha acometido la tarea de hacer inversiones productivas destinadas a que el país no corra el riesgo de que su vida dependa únicamente de ingresos procedentes del petróleo, que, a largo plazo, acabará por agotarse o verse sustituido por otras fuentes de energía, del mismo modo que el petróleo sustituyó al carbón en la industria y los usos domésticos.

En la actualidad, en Libia, lo menguado y hasta primitivo del aparato productivo que no esté relacionado con el petróleo contrasta con la importancia de los ingresos procedentes de la exportación de esa materia prima. Es hecho que diferencia singularmente la economía libia de una economía normal, en la que los ingresos son reflejo de la producción. Pero una de las consecuencias del hecho de ser un Estado-rentista es que no sólo la agricultura no progresa, sino que retrocede por cuanto los medios de que dispone el Estado incitan a que el consumo nacional se supedite cada año más a la importación de productos alimenticios y manufacturados. De otra parte, el aumento vegetativo y el éxodo rural incrementan el proletariado urbano, ya que la actividad petrolera sólo emplea del 4 al 5 por 100 de la mano de obra disponible, si bien se da la falta de mano de obra calificada, en razón del bajo nivel cultural del país, extremo éste que no se remedia sino con el tiempo y manteniendo sin desmayo un esfuerzo educativo, imposible de llevar a cabo, por lo menos inicialmente, sin una cooperación exterior. Finalmente, apenas si puede mencionarse la industria, siempre que se la distinga del petróleo. Libia partió de cero hace poco más de veinte años. Hasta la llegada al poder en 1968 del Consejo de la Revolución, la actividad del país casi se limitó a ver fluir ríos de petróleo hacia el exterior, mientras arroyos de divisas corrían hacia las arcas y las cuentas corrientes. Es decir,

que el descubrimiento de la riqueza natural de Libia no fue punto de arranque del desarrollo por el que se afana el actual equipo dirigente. Este tiene ante sí la ardua empresa de impulsarlo armoniosamente, es decir, sin que se altere su orden habitual, que se asienta en tres pilares: agricultura, industria, servicios. Actualmente, cuando la agricultura está en regresión y la industria en sus balbuceos, el sector terciario es dinámico, incluso excesivamente dinámico, precisamente debido al retroceso de la agricultura y la morosidad de la industria.

Un vistazo a los acuerdos suscritos en Madrid por España y Libia los 26 y 27 de abril revela que los dirigentes libios lo han negociado con clara visión de las realidades de Libia y conciencia de los fallos y anomalías de las estructuras económicas de su país, necesitado de cooperación tanto en el ámbito de la técnica como para crear industrias, y más aún para controlar todo el proceso petrolero (prospección, transporte, refinó), lo cual es la suprema ambición de los países productores. De ahí que sea significativo el acuerdo por el que se amplía el campo de prospecciones de Hispanoil, que, sea dicho de paso, es una de las mejores proyecciones de España en el exterior. Asimismo es significativa la solicitud libia de construcción de barcos en astilleros españoles, algunos de gran tonelaje, y la ampliación de la capacidad de refinó español, con aportación de capital libio. No lo es menos el propósito de crear industrias de fertilizantes—fundamentales para la agricultura—mediante la construcción de plantas de amoníaco en Libia y España, ambas con capital mixto. Y también de una siderurgia en Libia. Finalmente, es de destacar el interés que se deriva para España de la cooperación en los planes de carreteras, puertos, hospitales y otras obras de importancia, por ser infraestructuras que requiere el desarrollo del país.

Cuando se diseña en el horizonte internacional un cambio radical en las relaciones entre países y se tiende a que se rijan por la cooperación y no en provecho del fuerte y detrimento del débil, es obvio destacar hasta qué punto es del interés de España y Libia caminar decididamente por el camino que han trazado los acuerdos suscritos. Por supuesto, no cabe esperar una rebaja del crudo que se importe de Libia, pero compras libias a nuestro país, pago de servicios—España enviará técnicos de grado superior a Libia—e inversiones libias en España harán que dejen de salir divisas de las arcas españolas sin contrapartida, como venía sucediendo. De hecho, lo que se ha planeado es un sistema de intercambios en circuito cerrado. Por ello puede

decirse que el viaje del primer ministro, Abdeslam Ahman Jalud, además de confirmar una vieja, leal y sólida amistad entre España y los árabes, entraña en lo económico la posibilidad de una provechosa singladura. Podría ampliarse a otros países árabes, en particular los mediterráneos. ¿No será el desarrollo de los países árabes ribereños del Mediterráneo «lo nuestro»?

NUEVAS TRIBULACIONES EN LA CEE

Como pedrada en ojo de tuerto ha caído en la CEE la decisión de Italia de depósito previo en un Banco y sin interés del 50 por 100 del valor de 600 productos importados, o sea el 40 por 100 de las importaciones, salvo las materias primas, porque tuerto es ese Club de los Seis, ampliado a Nueve, que sólo dispone del ojo económico, si bien no cesa de proclamar el propósito de contar con el ojo político. Pero los sucesivos intentos de La Haya, París y recientemente Copenhague no han conseguido tal, con el agravante de que desde Copenhague han desaparecido del escenario, por muerte política o física, los más destacados promotores de una visión completa para la CEE: Joergensen, Heath, Pompidou y, finalmente, Brandt.

Considerada en sí, mejor dicho, desde un punto de vista nacional, la medida no era de índole a sembrar la alarma y provocar el disgusto de las huestes comunitarias, pues la justifican las circunstancias económicas de Italia, de la que es reflejo el déficit de su balanza de pagos, que arroja una cifra superior a la del presupuesto de ese país: 2.372.000 millones de liras. Ese tremendo déficit imponía medidas drásticas. Adoptadas en el marco comunitario, suponen desandar de un plumazo el camino recorrido para alejarse del nacionalismo económico o de una economía nacional. Es más: lo que ha desconcertado a los restantes miembros de la CEE es, tanto como la decisión italiana, la forma en que se ha adoptado: sin encomendarse a Dios ni al diablo, queremos decir sin consultar previamente con ellos ni con la Comisión europea, lo que zapa los cimientos de la laboriosa construcción técnica de la CEE, uno de cuyos objetivos es la libre circulación de las mercancías entre los países que la integran. Liándose la manta a la cabeza, Italia ha puesto a sus consocios ante los hechos consumados, haciendo caso omiso del artículo 108 del Tratado de Roma, para acogerse al artículo 109. Es lo que evidencia el informe facilitado en Bruselas el 1 de mayo por el ministro italiano de Asuntos Exteriores, Aldo Moro. Es de presumir la impresión

que causó la noticia a los restantes miembros de la CEE, pese a su experiencia de este tipo de decisiones anticomunitarias. En efecto, sin remontar el curso del tiempo, en lo que va de año ya había registrado la decisión unilateral de Francia de dejar flotar su moneda, sacándola de la llamada «serpiente comunitaria», y la petición de renegociación de los acuerdos formulada por Gran Bretaña.

Con todo, la decisión italiana resultó tanto más sonada cuanto que, pensada y orientada la economía de los Nueve en términos de Mercado Común, afecta directamente a las respectivas exportaciones y modifica de hecho las corrientes comerciales existentes; ello en razón de barreras que, sin ser aduaneras, en la práctica desempeñan similar función. Es decir, que, aparte de ser un serio frenazo a la construcción europea, el depósito previo a la importación incide en las exportaciones a Italia de los demás países de la Comunidad. Es en particular el caso de Francia, cuya balanza comercial con aquel país arrojaba un superávit de 4.000 millones de francos en 1973, equivalente aproximadamente al 20 por 100 del déficit originado por las importaciones de petróleo. De consiguiente, se inicia una nueva fase de la crisis comercial que afecta al mundo occidental, y acaso Italia haya abierto un portillo a una serie de medidas proteccionistas, sucesivamente adoptadas por los países de la CEE, todos ellos enfrentados con serias dificultades económicas. Los miembros de la CEE han encomendado a la Comisión europea que «coordine y vigile las medidas adoptadas por el Gobierno italiano», única resignada decisión que haya tomado el Consejo de Ministros de los Nueve, reunido el 7 de mayo con intención de buscarle remedios a la peliaguda situación de la economía de Italia y en espera de que en la aplazada reunión del 4 de junio se considere la cuestión en el marco del artículo 109 del Tratado de Roma. Mientras tanto, la Comisión europea ejercerá el control jurídico y técnico de la decisión italiana, que sigue en vigor. En realidad, aunque hubo recriminaciones y quejas por su adopción, no originó una tormenta en el seno de la CEE, en particular por parte de Gran Bretaña, tal vez satisfecha de que otro Estado miembro le allanara el camino para insistir en sus pretensiones, que, no obstante, no volvió a formular en esta ocasión.

No han parado allí los disgustos y sobresaltos de la CEE. El 8 de mayo el Gobierno de Dinamarca ha decidido aumentar los impuestos indirectos sobre las importaciones, sometiendo el mismo día la decisión al Parlamento. La Comisión europea se ha apresurado a declarar que, desde el punto de

vista comunitario, no es ilegal la medida, que, en todo caso, Dinamarca ha mantenido muy callada. Ni siquiera aludió a semejante eventualidad cuando la víspera se discutió en Bruselas la decisión italiana. ¿Corre el riesgo la CEE de que cunda el mal ejemplo de Italia? Pero ésta, en definitiva, no hace sino seguirle los pasos a Francia, adelantada desde 1968 en el camino de la secesión. Es decir, que no pueden descartarse reacciones en cadena en el ámbito comunitario.

Aparte de comprometer la existencia—de momento económica—de la CEE, pondrían de manifiesto que, a pesar de los años de rodaje, todavía no se ha resuelto la contradicción entre el interés comunitario y el interés nacional que sale a flote en coyunturas de crisis. Tal vez sea así porque subsisten fronteras entre lo nacional y lo comunitario y que lo ventajoso para la Comunidad no lo sea para alguno o algunos de los países que la constituyen. Es decir, que el repliegue hacia el nacionalismo económico que parece iniciarse en la CEE tiende a demostrar la escasa capacidad unificadora de factores exclusivamente económicos, que no están cimentados por una efectiva unidad política. En fin de cuentas, ¿no será la cacareada unidad de Europa—por lo menos, de la Europa occidental—algo tan teórico como la cristiandad medieval? Aunque la cristiandad no resultara afectada por la carga de los nacionalismos posteriores, no fue nunca realidad coherente y actuando en orden cerrado.

RELEVO EN LA REPÚBLICA FEDERAL

Entre el sonriente canciller Brandt, galardonado en 1972 con el Premio Nobel de la Paz, y la grave y dolorida expresión de su rostro al dar a conocer en la noche del 6 al 7 de mayo su decisión de dimitir no media sólo la tragicomedia del espionaje, puesto en bandeja al «refugiado» de la República Democrática Günter Guillaume, retrepado en la confianza e intimidad del jefe del Gobierno federal. A ningún observador se le ha pasado por alto que, con espía o sin él, el canciller Brandt estaba en pérdida de velocidad no sólo en la carrera de la *Ostpolitik*, emprendida a uña de caballo no bien accedió al poder, sino también frente a la opinión pública. De todos modos, y prescindiendo de esa baja de la popularidad, puede estimarse que, sin la acción de Guillaume, dedicado a advertir Pankow y el Este la carta que iba a jugar Bonn durante las delicadas negociaciones del acuerdo básico, Egon Bahr se hubiera encontrado con un adversario menos pretre-

chado. Y posiblemente Pankow no hubiera podido edificar entre las dos Alemanias ese muro de papel, que refuerza el muro de cemento, y que tanta desilusión ha causado al pueblo de la República Federal. Las inesperadas paradas puestas a punto por los negociadores de la República Democrática debieron de conturbar al máximo al negociador federal, Egon Bahr, que dice—por lo menos ahora— haber desconfiado de Guillaume tan pronto como entrara a formar parte del círculo de íntimos colaboradores del canciller. Es más: afirma que había manifestado sus recelos al ministro de Comunicaciones, Horst Ehmke, que llevó de la mano a ese camarada en la socialdemocracia. Se evidencia, pues, que una cierta miopía e ingenuidad se ha dado en las altas esferas federales y no sólo en el canciller Brandt, aunque éste haya tenido la gallardía de «asumir la plena responsabilidad política en el asunto Guillaume». De hecho, es toda la acción gubernamental la que Guillaume ha puesto en solfa, extremo éste que no puede por menos que turbar a la opinión alemana.

Con todo, por grave y enojoso que sea ese asunto de espionaje, por sí solo no podía determinar la dimisión de Brandt. Además de desagradables revelaciones sobre devaneos de su vida privada, han sido otras las causas que venían condicionando su retirada del poder. Entre ellas figuran las tensiones existentes en el marco de la coalición liberal-social, las dificultades económicas derivadas de la inflación y un retroceso del SPD, reflejado en los resultados de recientes elecciones. En efecto, en la consulta electoral legislativa de Hamburgo, en las elecciones municipales de Schleswing-Holstein, Renania, Palatinado y el Sarre se ha evidenciado un claro avance de los democristianos, que se están entrenando para las elecciones generales de 1976 a base de éxitos en elecciones parciales en numerosos municipios. Ante lo delicado del panorama electoral, parece que se imponía renovar piezas de la maquinaria gubernamental liberal-socialista, que tiene mayoría en el Bundestag y que no está nada dispuesta a abandonar el poder antes de dos años, lo que reduce a categoría de vano deseo la petición de la CDU de que se celebren inmediatamente nuevas elecciones. Es decir, que al canciller Brandt, en defensa de la supervivencia de la coalición gubernamental en el poder, le ha correspondido hacer de chivo expiatorio en un intento de evitar un nuevo éxito electoral democristiano en las elecciones regionales del 9 de junio en la Baja Sajonia, donde los pronósticos no son favorables al SPD. Si a ello se añaden las tendencias diversas que chocan en el seno del partido socialista, casi tiene perfil de airosa salida la dimisión de Brandt,

que, en cierto modo, deja a salvo su figura humana, aunque aseste un duro golpe a la figura política del que es todavía jefe del SPD.

A canciller dimitido, nuevo canciller; en este caso, Helmut Schmidt, el enérgico y dinámico ministro de Hacienda. La sustitución, al parecer, no implicará cambio en el número de liberales que forman parte del Gobierno de coalición. Pero ¿pondrá al SPD a salvo de los peligros que lo rondan? Es prematuro para hacer pronósticos, por cuanto la orientación de la opinión alemana dependerá del acierto en la gestión del nuevo canciller, firme defensor del marco, cauto con relación a la *Ostpolitik* y convencido partidario de estrechos vínculos y eficaz coordinación entre la República Federal y los Estados Unidos, como se echara de ver en el pasado febrero durante la Conferencia de la Energía celebrada en Washington, en la que arremetió contra el ministro francés de Asuntos Exteriores, Michel Jobert, al extremo de que pareciera pura teoría el acuerdo entre París y Bonn, pared maestra de la CEE. Ello no implica una hostilidad sistemática a Francia, que podría afectar al futuro de la maltrecha Comunidad, de ser cierto que Schmidt está unido por estrecha amistad y coincidencia de criterios con Valéry Giscard d'Estaing, candidato a la presidencia de la República francesa. Por lo tanto, la solidez del eje Bonn-París pende en gran parte del resultado de las elecciones presidenciales francesas, que, de ser favorables al candidato centro-reformista, podría ser de nuevo lo que fuera en tiempo de Adenauer y De Gaulle, artífices del Tratado franco-alemán de 1963.

En un contexto más amplio, cabe decir que la reciente peripecia política de Alemania Federal, tanto como el fallecimiento del presidente Pompidou, marca el término de una determinada etapa del caminar de la Europa de los Nueve. Es extremo que refleja una crisis del mundo europeo, que apenas si podía preverse al iniciarse el año de 1974, y cuyas principales incidencias corresponden a la caída del poder o la muerte de destacados protagonistas: Heath, Pompidou, Caetano, Brandt. ¿Terminará aquí esa especie de juego del pimpampún político occidental?

ELECCIONES PRESIDENCIALES EN FRANCIA

Reiterada y muy justamente se ha dicho que en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales francesas del 19 de mayo ha habido un vencedor, pero no un vencido. El escaso margen de votos —sólo 422.791— que ha llevado Valéry Giscard d'Estaing a la presidencia de la República avala el aserto.

No hay, pues, por qué echar las campanas al vuelo y menos estimar que este recortado éxito electoral da por zanjada la competición que enfrentó a las dos mitades de Francia a través de sus respectivos candidatos. Tal sería el caso en un campeonato de fútbol, no en la vida política, que dista mucho de ser una prueba deportiva, aunque los dirigentes de la izquierda unida hayan declarado deportivamente que acataban la voluntad popular. En cambio, el partido político que ha resultado vencido, por eliminación en la primera vuelta de Chaban-Delmas, que sólo obtuvo el 15,15 por 100 de los votos, es el gaullismo agrupado bajo la bandera de la UDR. Nada tiene de sorprendente que se haya desfondado el gaullismo, una vez muerto el general De Gaulle y George Pompidou, que salió a la palestra como su heredero y continuador. El gaullismo no era una doctrina política propiamente dicha. Era un modo de actuar en el ámbito político en función de esa «cierta idea de Francia» que se había formado el general De Gaulle y que en no pocas ocasiones no dio en el blanco de la realidad. Dicho en otros términos, el 19 de mayo ha desarticulado una mayoría que, mediante la UDR, se confundía con el poder. El éxito electoral convierte a Giscard d'Estaing en cimienta de una nueva mayoría que integran grupos políticos que no son todos alérgicos al socialismo, sino al comunismo. Entre éstos destaca el partido radical-socialista, llamado «de derechas», que preside Jean-Jacques Servan-Schreiber, tenaz oponente de un gaullismo que ha tenido tendencia a pasar indefinidamente al país la cuenta del papel del general De Gaulle en la resistencia frente al ocupante alemán; de eso hace más de treinta años.

La amplia, variada y hasta heterogénea mayoría originada por el éxito de Giscard d'Estaing le garantiza, ciertamente, un respaldo parlamentario que le facilitará la tarea a nivel gubernamental, aunque las diversas familias políticas carezcan del común denominador de un programa concertado de futuro. De ahí que no esté inicialmente en condiciones de neutralizar el bloque de la izquierda unida, que cierra filas en torno a François Mitterrand y tiene un programa común. La victoria electoral que se frustró por medio millón escaso de votos no ha incidido en el mantenimiento a toda costa de ese programa común y acción unitaria para alcanzar los objetivos que señala. Es tanto menos utópico el propósito cuanto que la izquierda política se complementa con el sindicalismo. Teóricamente apolítico, el sindicalismo está hartamente politizado, y el conjunto de sus agrupaciones constituyen unidades de choque en la lucha social. No será éste el menor escollo que haya de sortear

Giscard d'Estaing, quien ha declarado su voluntad —que además es su deber— de «ser el presidente de todos los franceses», es decir, un nexo entre las dos mitades del país, ambas con fuerzas electoral muy similar, pero cuya capacidad combativa y perturbadora de la vida nacional está incuestionablemente en manos de la izquierda. Aun descartando el riesgo de que «la tercer vuelta se celebre en la calle», la presión sindical azuzará a Giscard d'Estaing para que lleve a la práctica sus promesas electorales de apertura social y cambio, aun evitando en el ámbito social que se acentúe la división existente en el ámbito político. En todo caso, los dirigentes sindicales han anunciado a voz en cuello que proseguirán la lucha y que urgen iniciar negociaciones tripartitas a nivel nacional, como las llamadas de Grenelle en mayo de 1968. Tal confirmó el secretario general de la CGT y miembro del Comité Central del Partido Comunista francés, George Seguy, en declaración hecha a *Le Monde* antes del 19 de mayo: «La llegada al Elíseo del líder independiente desencadenaría una amplia ofensiva sindical casi instantánea», en tanto que de salir vencedor Mitterrand «los sindicatos moderarían sus primeras reivindicaciones». Conocedor de los resultados de la votación, el propio Mitterrand dijo escuetamente: «El combate prosigue.»

No dejan de tener justificación los buenos ánimos de la izquierda francesa, por asentarse en cifras reveladoras de su constante progreso electoral. En las elecciones legislativas de 1967 consiguieron el 43,51 por 100 de los votos; en las legislativas del año pasado, el 47 por 100, y en las últimas presidenciales, el 49,19 por 100. No es descabellado que la izquierda unida, nueva versión del Frente Popular, estime que con un nuevo empujón en futuras elecciones puede ostentar la mayoría parlamentaria. Es más: la victoria que han tenido al alcance de las manos ha aguzado el apetito de la izquierda, que saborea los resultados prácticos de la unión de todas las fuerzas de esa tendencia, ensambladas por un programa común. Por lo pronto, a nivel sindical, el 20 de mayo se espabilaron de repente una serie de huelgas localizadas que durante la campaña electoral se habían adormecido. Las posturas adoptadas sin tapujos por los dirigentes sindicales no permiten excluir la posibilidad de que esas huelgas se multipliquen, en orden disperso o cerrado, para apremiar al nuevo equipo gubernamental a cumplir las promesas del candidato Giscard d'Estaing, cogido entre la espada de los conflictos sociales y la pared de una coyuntura económica de crisis que rebasa el ámbito nacional. Es perspectiva a corto plazo—tan destacada por todos los observadores, que se reduce a la categoría de tópico— afirmar que no le so-

brará al presidente Giscard d'Estaing un solo ápice de su extraordinaria inteligencia para capear el temporal que amenaza su aún no iniciada singladura, por cuanto sólo asumirá oficialmente sus funciones de presidente de la República francesa el 24 de mayo.

Sólo en esa fecha se conocerá quiénes son los que tripularán con él la nave gala. Y se barajan nombres y más nombres e incluso la posibilidad de que Giscard d'Estaing forme gobierno con personas de su confianza, designadas fuera de los partidos políticos, si bien no parece que sea fácil ignorar los compromisos derivados de los apoyos electorales. El toma y daca es parte integrante de la política, cualquiera que sea el marco en que se desarrolla. Por ello eventualmente figurará en el nuevo Gobierno alguno o algunos miembros de la UDR, que decidió cerrar filas en torno a Giscard d'Estaing, una vez eliminado Chaban-Delmas de la competición. Pero no escasos gaullistas hicieron oídos de mercader a los requerimientos de sus dirigentes. Tal se vio en particular en Aquitania, feudo de Chaban-Delmas, donde en la segunda vuelta aumentó notablemente el número de votos a favor de Mitterrand, calificado de candidato de los comunistas. Esa opción no es sorprendente. En tiempos del general De Gaulle los votos comunistas en su favor fueron uno de los factores de su éxito. Tampoco le faltaron a Georges Pompidou en las presidenciales de 1969. No fue ésta una de las menores ambigüedades del gaullismo, tal vez determinante para que los jóvenes gaullistas, sin recatarse, pasaran en la segunda vuelta a engrosar el bando capitaneado por Mitterrand, mientras que los comunistas, durante la campaña electoral, aflautaran la voz para recordar el codo a codo con los seguidores del general De Gaulle durante la Resistencia, aparte de que el primer Gobierno que formó el general De Gaulle comprendía comunistas, en particular Thores, secretario general del Partido Comunista francés.

Por tanto, todavía ha coleado en las elecciones presidenciales galas el recuerdo histórico, si bien está claro que ha carecido de vigor a la hora del voto. En cambio, éste ha confirmado la bipolaridad de Francia, que no data de ahora. Es una compleja bipolaridad, social, regional, generacional, que convierte en gracioso dislate la afirmación de un dirigente sindicalista, según el cual la izquierda unida era «el partido de los trabajadores», lo que imponía a los trece millones largos de electores de Giscard d'Estaing la condición de vagos, explotadores y maleantes, deseosos, dadas sus prebendas, de mantener el *statu quo* económico y social. Y no es así. El deseo de cambio cala en las honduras de toda Francia. La dificultad estriba en promover un

cambio susceptible de satisfacer las reivindicaciones de uno de los polos franceses, pero sin trastocar las instituciones ni derrumbar las estructuras tradicionales, eventualidad que rechaza el otro polo. En suma, para el tercer presidente de la V República, el número 1 de la Escuela Politécnica, casi se trata de resolver la cuadratura del círculo.

Le acompañe el éxito, que, aunque sólo fuera por egoísmo nacional, han de desearle todos los países no comunistas, o se nuble la buena estrella que parece presidir el destino de Valéry Giscard d'Estaing, lo evidente es que Francia ha cancelado una etapa histórica e inicia otra de nueva lógica política, en la que los conceptos propios de la derecha y la izquierda han de converger hacia una síntesis que garantice la paz interna y todo el bienestar compatible con la difícil situación económica del mundo.

CARMEN MARTIN DE LA ESCALERA